



RICARDO
SERRA ARIAS

EL CAMPO ANDALUZ DEMANDA HECHOS Y NO PALABRAS

El sector agrario es un factor clave en el desarrollo del tejido económico, social y territorial de Andalucía, una región con una importante diversidad productiva. La actividad agraria es la principal fuente de empleo de más de la mitad de los municipios andaluces. Es un sector estratégico en nuestra comunidad por su aportación al PIB y por ser la base de una potente agroindustria que ha permitido que Andalucía encabece en 2014 el ranking español de exportaciones agroalimentarias, copando, con unas ventas que ascendieron a 8.312 millones de euros, el 22 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias del país. Sin embargo, esta bonanza aparente no llega al primer eslabón de la cadena, al agricultor y al ganadero, que experimentan una constante reducción de la renta agraria (un descenso que el Ministerio de Agricultura cifró en el 7,1% en 2014) y que se ven «encajonado» entre dos fuerzas muy superiores sin apenas capacidad de defensa.

A pesar de la importancia de las ayudas directas de la PAC, el grueso de la renta del agricultor y ganadero proviene de la relación entre el precio que percibe por la venta de su producción y el coste que ha tenido que asumir para obtenerla. En esta relación, el agricultor es el eslabón más débil. Sin capacidad para marcar el precio a unos operadores obsesionados por comprar aún más barato y sin capacidad por tanto para repercutir el aumento de costes en el precio de venta.

Este es hoy el principal problema del sector agrario andaluz que ha llevado al cierre de más 20.000 explotaciones en los últimos cinco años y que supone un serio «handicap» para todo aquel que pretenda incorporarse, porque sin rentabilidad es imposible garantizar la continuidad de ninguna actividad. Por lo tanto, ser sensibles a esta realidad y buscar las mejores condiciones para que el mercado retribuya dignamente a los productores será el primer reto que deberán afrontar, con urgencia, quienes gobiernen Andalucía a partir del 22 de marzo, y así se lo estamos trasladando desde Asaja a los grupos políticos que concurren a las elecciones y al conjunto de los electores de dentro y fuera del sector agrario.

Para desarrollar esta tarea deben aplicarse todos los instrumentos legales con los que ya contamos, deben extenderse los controles a todas las producciones y deben multiplicarse las sanciones a todos los infractores, puesto que el abuso de posición dominante, el incumplimiento de los plazos de pago y las prácticas oligopolísticas y anticompetitivas, que llevan incluso a fijar acuerdos entre las industrias para

establecer un precio máximo de compra, no son exclusivas del sector lácteo y están, por desgracia, mucho más generalizadas de lo que los consumidores y los ciudadanos de buena fe puedan pensar.

Junto a este reto, deberían ser puntos esenciales en la «hoja de ruta» del nuevo Gobierno Andaluz la consecución de medidas eficaces de gestión de los mercados ante situaciones concretas de crisis o sectores en riesgo (crisis del pepino, veto ruso...) puesto que, en estas situaciones, si se carece de unos niveles mínimos de estabilidad de precios y rentas, el daño a los productores conlleva además la desaparición del sector. Es también necesaria la recuperación del apoyo económico al plan de seguros agrarios, un sistema que funciona en España desde hace 36 años y que permite ahorrar a nuestras Administraciones miles de millones de euros al evitar que se tenga que acudir al rescate tras cada siniestro grave, tal como está ocurriendo estos días en la cuenca del Ebro. Es asimismo fundamental aplicar una política hidráulica que dé estabilidad y cohesión a nuestro territorio. El agua es sinónimo de

riqueza. Debemos tener esta riqueza garantizada, sin utilización partidista.

Quienes resulten elegidos para que nos gobiernen a partir del 22 de marzo además de intercalar en sus discursos la innovación, deben ponerla al alcance de la explotación agraria, fomentando su modernización y adaptación a los nuevos tiempos. Y en este ámbito de la innovación no podemos continuar dando la espalda a la biotecnología agraria, que contribuye a mejorar las producciones, a reducir costes e insumos y a asegurar la viabilidad de las cosechas ante circunstancias extremas manteniendo los elevados criterios de respeto medioambiental marcados por la Unión Europea.

El nuevo Gobierno andaluz debe valorizar las producciones andaluzas y tener presente que nuestros productos son, sin duda, los más seguros del mundo. Sin embargo, la UE mantiene una postura «esquizofrénica» al permitir la importación de alimentos de países terceros producidos con prácticas que aquí tenemos prohibidas. El consumidor europeo, debe poder conocer de donde proceden y con qué prácticas han sido obtenidos los alimentos que se le ofrecen en los mercados.

En esta misma línea es importante recordar que la UE cuenta con una sola frontera. Es decir, lo que ha entrado en cualquier puerto de la UE, ha entrado ya en Europa. Así, mientras que otros

países mantienen unos estrictos controles a las importaciones, incluso con un único puerto de acceso para prevenir la entrada de plagas que pudieran asolar sus explotaciones, la UE mantiene una política mucho menos rigurosa al respecto, con mecanismos poco satisfactorios tanto de inspecciones en origen como de control en frontera. Por tanto, es necesario extremar los controles para evitar la entrada de plagas.

Por otra parte, la promoción de nuestras producciones debe ser una constante en la política del nuevo Gobierno. La exportación agroalimentaria es para España y para Andalucía una fuente importantísima de recursos, y contribuye a equilibrar la balanza comercial, por lo que se trata sin duda de un factor determinante en la recuperación económica de Andalucía y de España.

Por último, debemos recordar que cualquiera que sea la política o las medidas de apoyo que se adopten, no funcionarán si no cuentan con el seguimiento de los jóvenes que garanticen la continuidad de las explotaciones. Es esencial fomentar la incorporación de jóvenes y el relevo generacional, de lo contrario, en pocos años, nuestro campo dará el paso definitivo del geriátrico al desierto.

Un reto
«El agua es
sinónimo de
riqueza.
Debemos
tenerla
garantizada»

RICARDO SERRA ARIAS
ES PRESIDENTE DE
ASAJA-ANDALUCÍA



Agricultores en plena faena en el campo andaluz

EDUARDO MANZANA